

El Gobierno reclama ahora a los regantes 70 millones para desbloquear el Júcar-Vinalopó

Los agricultores ven «imposible» asumir el pago y la Confederación trata de mediar con el Ministerio

F. J. Benito | | 07.10.2018 | 00:50

La cantidad se cobraría por un proyecto del que fueron expulsados tras el cambio de la toma del agua en 2005.

La historia interminable. Primero fue la incorporación de la **desaladora de Mutxamel** y ahora el Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado a la Junta Central de Usuarios del **Trasvase Júcar-Vinalopó** que el convenio de explotación del trasvase (seis años funcionando en precario con acuerdos provisionales) tiene que incluir el pago, a cargo de agricultores y ayuntamientos, de **70 millones de euros del coste de las obras**, tal como se firmó en 2001 en el convenio para la ejecución del trasvase.



El Gobierno reclama ahora a los regantes 70 millones para desbloquear el Júcar-Vinalopó

Un convenio que saltó por los aires de forma unilateral en 2005 con el cambio de toma decidido **por el entonces Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona** y la expulsión de la Junta Central como usuaria del agua, pasando la titularidad a la Confederación del Júcar. El pago de la amortización de las obras representaría duplicar el precio del agua hasta los 0,53 euros el metro cúbico para una cantidad de 20 hm³; al año, que es lo que se negocia. Un precio superior al que se paga por el agua desalada y cuatro veces más alto que el caudal que llega del Tajo-Segura.

Ambas partes se han reunido esta semana y en el encuentro se ha trasladado a Manuel Alcalde, presidente de la Confederación, Manuel Alcalde, la negativa al pago «porque es imposible que podamos financiarlo. Ellos lo rompieron y ellos lo tienen que solucionar pero no los agricultores, que ya hemos cedido pagar más alto el precio del agua», subraya Andrés Martínez, presidente de la Junta Central.

El representante del Ministerio se ha comprometido a que el tema se estudie en Madrid pero no parece que haya mucha esperanza tras la experiencia de los últimos 13 años en los que ni el PSOE ni el PP solucionaron el problema.

La Junta Central ha comunicado a la Confederación Hidrográfica del Júcar su negativa y solo acepta pagar 0,23 euros el metro cúbico (0,7 euros/m³; más que la tarifa pactada en un principio), al considerar que las obras debe pagarlas la Confederación del Júcar, que ahora mismo es la única usuaria del agua.

El riego de socorro aprobado en julio gracias a la aportación económica extraordinaria del Consell (800.000 euros) se acabará a finales de diciembre y si no hay acuerdo volverán las tensiones por la falta de recursos. Desde 2012, cuando se finalizaron las obras, la provincia de Alicante solo ha recibido **38 hm³; de agua del Júcar**. Seis años en los se debieran haberse trasvasado 480 hm³; por una canalización que al final costó 400 millones de euros y sigue con graves carencias, como el que no se hayan reparado las fugas del embalse regulador de San Diego, en Villena. Mientras, el nivel del agua del acuífero de Crevillent ha descendido 18 metros y el de **Elda** 60 metros.

La cronología del desastre que ha supuesto el proyecto del Júcar-Vinalopó, un trasvase respaldado y apoyado por la UE con 120 millones de euros, arranca con el primer convenio firmado el 13 de julio de 2001, y en el que Gobierno y Junta Central de Usuarios (30.000 agricultores y 50 municipios) pactaban la construcción de un trasvase de aguas del Júcar por el que llegarían 80 hm³; al año desde Cortes de Pallás.

El 28 de agosto de 2005 todo saltaba por los aires al cambiar la toma del agua al Azud de la Marquesa, en la desembocadura del río Júcar y cuyo caudal sólo sirve para regar, pero fue aceptado finalmente por los agricultores.

El 2 de diciembre de 2015 se firma el protocolo con el Ministerio de Agricultura para la firma del convenio de explotación y tras dos años el 21 de diciembre de 2017 se envió el borrador para la redacción del convenio definitivo. «El regadío paga un precio asumible y el déficit de la tarifa se repartía entre todos los usuarios, incluidos los ayuntamientos aunque el agua del Azud de la Marquesa no sirva para consumo urbano al estar mezclada con agua residual depurada», subraya Andrés Martínez, presidente de la Junta, que se encuentra ahora con que les plantean pagar, además, 70 millones de euros en concepto de amortización de una obra «de la que nos expulsaron y no podemos pagar. En 2001 sí porque los precios eran otros sí pero hoy es imposible».

El trasvase está operativo desde 2012 pero funciona con acuerdos puntuales que se renuevan año tras año. Entre 2012 y 2018 solo han llegado 37,9 hm³, con un máximo de 8,7 hm³ en 2017 y un mínimo de 3,4 hm³ en 2014. Los 6,3 hm³ del riego de socorro de este año se acabarán del 30 de noviembre. A partir de ahí, de nuevo el caos.